

C.A. de Valdivia

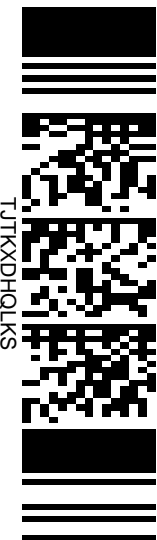
Valdivia, diez de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En causa Rol Penal de esta Corte N°1514-2022, se conocen dos recursos de nulidad interpuesto el primero por el abogado don Felipe Moraga Marinovic, defensor penal privado, en representación del condenado don Francisco González Berríos, y el segundo por el abogado don Hugo Inostroza Hermosilla, defensor penal privado, en representación del condenado don Juan José Ortega Ramírez, ambos en causa R.I.T. 141-2022, R.U.C. N°20002981169-7, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 19 de diciembre de dos mil veintidós, por los jueces titulares y la jueza destinada de la Primera Sala don Carlos Flores Valenzuela, don Ricardo Aravena Durán y doña Lissette Salazar Sandoval, quienes resolvieron en los siguientes términos:

*I.- Que, **Se CONDENA a JUAN JOSÉ ORTEGA RAMIREZ**, Cédula de Identidad N.º 26.140.050-2, ya individualizado a la pena de **VEINTE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO**, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad como autor ejecutor del artículo 15 N°1 del Código Penal del delito consumado de **homicidio calificado**, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 concurriendo las circunstancias calificantes primera y segunda del Código Penal, perpetrado en la ciudad de Valdivia con fecha 15 de marzo de 2020, en contra de Germán Muñoz Villegas.*

*II.- Que, se **CONDENA a JUAN JOSÉ ORTEGA RAMIREZ**, Cédula de Identidad N.º 26.140.050-2, ya individualizado a la pena de **3 AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios público durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como autor según definición del artículo 15*



N° 1 del Código Penal del delito consumado de **Tenencia ilegal de Armas de fuego prohibida**, previsto y sancionado en el artículo 3 y 14 de la Ley Sobre Control de Armas, N°17.798, perpetrado en la ciudad de Valdivia el día 10 de abril de 2020.

III.- Que, se **CONDENA** a **JUAN JOSÉ ORTEGA RAMIREZ**, Cédula de Identidad N.º 26.140.050-2, ya individualizado a la pena de **541 DÍAS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO**, a la accesoría de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como autor según definición del artículo 15 N°1 del Código Penal del delito consumado de **tenencia ilegal de municiones** previsto y sancionado en los artículos 2 c) y 9 inciso segundo de la Ley Sobre Control de Armas N° 17.798, perpetrado en la ciudad de Valdivia el día 10 de abril de 2020.

IV.- Que, atendida la extensión de las penas impuestas y lo dispuesto en la Ley N° 18.216, el sentenciado **JUAN JOSÉ ORTEGA RAMIREZ** deberá cumplir efectivamente las anteriores **princiando por la más grave** ejecutoriada que se encuentre, en el Centro Penitenciario que determine Gendarmería de Chile, sirviéndole de abono 983 días que permaneció sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva de manera ininterrumpida desde el día 11 de abril de 2020 según se lee del Motivo Décimo del Auto de Apertura de fecha 1 de septiembre de 2022 y hasta aquel en que esta sentencia revista el carácter de ejecutoriada.

V.- Que, Se **CONDENA** a **FRANCISCO ANDRÉS GONZÁLEZ BERRÍOS**, Cédula de Identidad N° 18.132.811-8, ya individualizado a la pena de **QUINCE AÑOS Y UN DIA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO**, accesoría de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad como autor intelectual del artículo 15 N.º 2 del Código Penal del delito consumado de **homicidio calificado**, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 concurriendo las circunstancias calificantes segunda del Código Penal, perpetrado en la ciudad de Valdivia con fecha 15 de marzo de 2020, en contra de Germán Muñoz Villegas.

VI.- Que, atendida la extensión de la pena impuesta y lo dispuesto en la Ley N° 18.216, el sentenciado **FRANCISCO ANDRÉS GONZÁLEZ**



BERRÍOS deberá cumplir efectivamente la pena corporal que le fuera impuesta, ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia, en el Centro Penitenciario que determine Gendarmería de Chile, sirviéndole de abono 572 días que permaneció sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva de manera ininterrumpida desde el día 27 de mayo de 2021, según se lee del Motivo Décimo del Auto de Apertura de fecha 1 de septiembre de 2022, y hasta aquel en que esta sentencia revista el carácter de ejecutoriada.

VII.- Que, **Se ABSUELVE a FRANCISCO ANDRÉS GONZÁLEZ BERRÍOS**, Cédula de Identidad N° 18.132.811-8, ya individualizado, de la imputación de ser autor del delito de Daños simples, previsto y sancionado en el artículo 487 del Código Penal, supuestamente acaecido el día 22 de septiembre de 2019 en la comuna de Valdivia.

VIII.- Que, **Se ABSUELVE a FRANCISCO ANDRÉS GONZÁLEZ BERRÍOS**, Cédula de Identidad N° 18.132.811-8, ya individualizado, de la imputación de ser autor del delito de Disparos Injustificados, previsto y sancionado en el artículo 14 D) de la Ley Sobre Control de Armas, 17.798, supuestamente perpetrado el día 22 de septiembre de 2019 en la comuna de Valdivia.

IX.- Que, no se condena en costas a los sentenciados conforme se razonara en el Motivo Vigésimo sexto de esta sentencia.

X.- Dese cumplimiento, en su oportunidad, a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970.

XI.- Cúmplase en su oportunidad, con lo ordenado en el artículo 17 de la Ley N°18.556, modificada por la Ley 20.568. Oficiese al Servicio Electoral.

Las defensas de ambos sentenciados sustentaron sus respectivos recursos de nulidad en la causal absoluta establecida en el artículo 374 letra e) relativa a la valoración de la prueba, con relación al artículo 342 letra c) y al artículo 297 del mismo cuerpo legal, por considerar que se vulneraron los principios de la lógica de la razón suficiente y no contradicción. Sin embargo, la defensa de don Juan José Ortega Ramírez, en forma subsidiaria y sólo para el caso de no acogerse la causal invocada como principal, solicita que se declare la nulidad de la sentencia en la parte impugnada por cuanto afirma que adolece del vicio de nulidad contemplado en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal esto es, que en su pronunciamiento se hizo



una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ello al producirse infracción al artículo 11 N° 6 del Código Penal en relación al artículo 68 del mismo cuerpo legal.

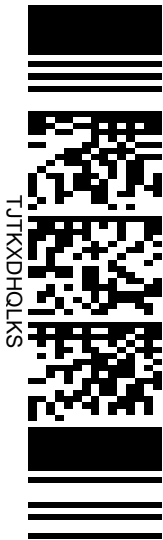
Fueron declarados admisibles ambos arbitrios por esta Corte y se procedió a su vista el día 20 de enero del año en curso, oportunidad en la que alegaron cada una de las defensas, por sus respectivos recursos, como el Ministerio Público, instando por su rechazo. El proceso quedó en estado de acuerdo, fijándose para la lectura de la sentencia la audiencia del día de hoy.

OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Al interponer sus arbitrios ambas defensas dan cuenta que en el considerando décimo el tribunal *a quo* describe detalladamente los hechos y circunstancias que se reputan probados en el juicio y en los siguientes se explica el razonamiento o análisis probatorio que precedió a dicha conclusión fáctica. A continuación cada una de las recurrentes formulan lo que denominan “desarrollo de la causal invocada”, afirmando prácticamente en idénticos términos, orden y citas de apoyo, que los sentenciadores de instancia omitieron o incumplieron el requisito establecido en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, esto es, “La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”.

SEGUNDO: La causal de nulidad invocada como única respecto del sentenciado González Berríos, en aquella parte que se refiere a la infracción al subprincipio de la razón suficiente, a la falta de fundamentación y de corroboración, le imputa a la sentencia de marras haber incumplido la prohibición de realizar una selección arbitraria del material probatorio en su proceso de razonamiento, de modo tal que la propia fundamentación expresada en la sentencia denota una evidente contradicción en el razonamiento con la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos afianzados.

En términos sintéticos, afirma que en la sentencia el tribunal selecciona parte de las declaraciones del coacusado, para creerle lo



referente al hecho punible y no creerle respecto a la participación, selecciona partes de la declaración del imputado para atribuir participación y luego desecha su testimonio, da pleno valor probatorio a conversaciones telefónicas entre el coacusado y otros sujetos como si en esas conversaciones no pudiera existir faltas a la verdad y selecciona parte del testimonio de oídas de un funcionario policial de un testigo protegido que no comparece a estrados. A ello agrega que la sentencia presentaría serias deficiencias en su proceso de corroboración inferencial, por cuanto la prueba se aprecia como ausente y la prueba de descargo no fue correctamente valorada.

A continuación, respecto a la infracción al principio de no contradicción sostiene que de los hechos probados o premisas y utilizando la lógica del tribunal es posible construir una conclusión distinta, completamente contradictoria con la de condena que sostuvieron los sentenciadores de instancia. Ello por cuanto las proposiciones fácticas de la sentencia no son mutuamente consistentes, ya que no son posibles de afirmarse sin contradicción en conjunción con todas las demás y con su conjunción.

Como consecuencia de todo lo anterior, la recurrente solicita la invalidación del juicio oral y de la sentencia, de manera que se ordene retrotraer la causa al estado de realizarse ante el Tribunal Oral no inhabilitado que corresponda, una nueva audiencia de juicio oral.

TERCERO: Por su parte, al desarrollar argumentalmente la causal de nulidad invocada como principal respecto del sentenciado Ortega Ramírez, su defensa pone énfasis en que lo relevante en el caso de marras decía relación con la acreditación respecto de si su representado participó de propia mano en la ejecución de los disparos que dieron muerte a la víctima. En esta línea su cuestionamiento a los sentenciadores no dice relación con el hecho de si participó el vehículo Renault, sino en la comprobación más allá de toda duda razonable de que el acusado Juan José Ortega Ramírez haya percutido los disparos mortales.

De manera que, según la defensa, la propia dinámica de los hechos acreditada por el tribunal nada entrega sobre la participación de su representado en el delito, ni menos aún la declaración de los dos testigos que en la sentencia se destacan como especialmente tenidos en

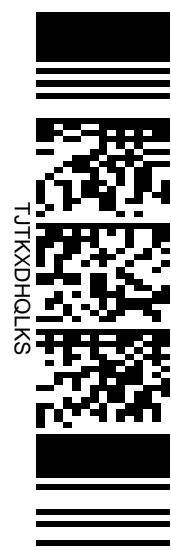


consideración para tener **por** establecida la participación del condenado en los hechos. Según la parte recurrente tales testigos no aportaron información de peso, por cuanto uno de ellos no miró al autor de los disparos y el otro no estaba en el lugar en que se realizaron los mismos, solo escuchó.

Siguiendo con la fundamentación de su causal, la defensa del condenado recurrente analiza el razonamiento realizado por el tribunal en el acápite de la sentencia denominado “Valoración de los medios de prueba en relación al procedimiento policial que determinó la participación de Juan José ortega Ramírez en el homicidio de Germán Muñoz”. Respecto de la diligencia de fijación fotográfica y planimetría del vehículo Subaru de propiedad de la víctima afirma que no contribuye en nada a determinar la participación de su representado. La misma conclusión reitera respecto de la declaración de los testigos que asistieron a la víctima y lo condujeron a un centro asistencial, así como del análisis de los registros de las cámaras de seguridad. Termina explicando las diligencias investigativas que realizó la policía a partir de estos primeros antecedentes y la manera cómo vincularon a su representado, no solo con el referido vehículo marca Renault, sino también con un teléfono móvil que estaba al interior del mismo al momento del homicidio, para reiterar que efectivamente “la mayor parte del tiempo” dicho automóvil era conducido por su representado, pero ninguno de todos los medios de prueba incorporados al juicio oral entregan una certeza más allá de toda duda razonable que el 15 de marzo a las 03:30 hrs. lo hubiere conducido y además hubiere percutado los disparos letales.

A continuación formula similares fundamentos a los de la defensa de González Berríos, en cuanto a la valoración de la prueba que tuvo por acreditado que ambos imputados se conocían y que el homicidio se habría cometido por encargo del co sentenciado. En este punto afirma que la sentencia es tremendamente débil, por cuanto establece una supuesta actividad reiterada de sicariato de parte de su representado, sin que exista corroboración real de aquellas circunstancias, otros hechos de muerte en la zona u otras investigaciones de sicariato reales que existan.

Como consecuencia de todo lo anterior, la recurrente solicita la invalidación del juicio oral y de la sentencia, de manera que se ordene retrotraer la causa al estado de realizarse ante el Tribunal Oral no inhabilitado que corresponda, una nueva audiencia de juicio oral.



CUARTO: En cuanto a la causal absoluta de invalidación invocada por ambas defensas, en los términos explicados sucintamente en los considerandos precedentes, lo primero que se debe tener en consideración es que en el sistema procesal penal impera, como principio rector, que el análisis de las probanzas rendidas pertenece a la esfera de competencia exclusiva de los jueces de la instancia, calidad que no detenta una Corte de Apelaciones cuando procede al conocimiento de un recurso de nulidad. De manera que no resulta posible detenerse en la revisión de los hechos que se han dado por establecidos por la judicatura del grado ni en la revaloración de los elementos de prueba aportados los intervinientes.

QUINTO: En efecto, lo que es exigible a los juzgadores en virtud de los artículos 297 y 342 c) del Código Procesal Penal, aduce a la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, lo que se traduce en *“la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad pero respetando, al explicar cómo llegó a ellas, los principios de la recta razón, esto es, las normas de la lógica (constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación y los principios lógicos de identidad, de no contradicción, de tercero excluido y de razón suficiente), los principios incontrarrestables de las ciencias (...) y la experiencia común”* (Cafferata Nores, José I. y Hairabedián Gogas, Maximiliano, La Prueba en el Proceso Penal, pág. 65-66).

A lo anterior se añade que *“los razonamientos que haga el juez deben encadenarse de tal manera que conduzcan sin violencia, “sin salto brusco”, a la conclusión establecida y sus juicios deben ser susceptibles de confrontación con las normas de la razón”* (González Castillo, Joel La Fundamentación de las Sentencias y la Sana Crítica, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N1, pág. 100).

De esta manera, los jueces son libres para apreciar la prueba que ante ellos se rinde, debiendo sólo argumentar circunstanciadamente las razones en que se cimenta su decisión, que deben encontrar fundamento en los antecedentes del proceso, respetando las reglas de la sana crítica, de modo que su raciocinio pueda ser entendido por un hombre medio.

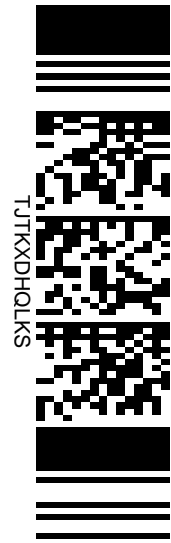
SEXTO: En virtud de las premisas ya expuestas, confrontadas con los hechos asentados en el fallo, más el análisis de las probanzas



incorporadas a la causa y vinculadas con aquéllos, consta en el considerando décimo segundo de la sentencia la manera cómo se valoraron los medios de prueba, primero en relación con la descripción de la conducta prohibida por el delito de homicidio, y al día, lugar y hora aproximada en que acaecieron los hechos, luego en cuanto al resultado de la conducta prohibida, que es la muerte de una persona, mientras que, a continuación, el mismo ejercicio analítico valorativo se formula en cuanto a la vinculación causal entre la conducta desplegada por el agente y la muerte de la víctima, don German Muñoz.

Como bien se señala en el recurso de nulidad del sentenciado Ortega Ramírez, en el literal d) de este considerando se explica la valoración de los medios de prueba que hace el tribunal de instancia sobre la dinámica de los hechos que derivaron en la muerte de la víctima, los que tuvo por establecidos con los testimonios prestados en las sesiones de audiencia de juicio de los testigos, en especial pero no limitado a las declaraciones de don Ángel Jerez Ruiz y Cristián Navarrete Montiel. En el literal siguiente se desarrolla una extensa y pormenorizada exposición del análisis hecho por el tribunal respecto del mérito de las pruebas recopiladas durante el procedimiento policial, que determinó la participación de Juan José Ortega Ramírez en el homicidio de Germán Muñoz, y luego fueron incorporadas al juicio oral.

Al finalizar esta parte del citado considerando, en la página 199 y siguientes de la sentencia impugnada, el tribunal de instancia se detiene a explicar las razones por las que “la dinámica anterior no logró ser desvirtuada por la Defensa del acusado, en orden a que habría sido no él, sino un tercero autor del homicidio, tratando con ello de incorporar a Mauricio Quintero en el desenvolvimiento de los hechos y con ello, un atisbo de duda exculpatoria”. Para hacerlo precisamente contrasta lo afirmado por el propio sentenciado Ortega Ramírez en su declaración, con el resto de la prueba rendida en el juicio. En palabras de los propios sentenciadores la teoría del caso de la defensa “es descartada y no de manera antojadiza, sino que, al contrario, con la propia prueba de cargo y descargo, las que claramente demostraron que ese día 15 de marzo de 2020 en el horario en que se habría asesinado a la víctima, Ortega Ramírez no fue visto por nadie ni en su domicilio ni en otro lugar, sin dejar de reiterar que siempre se mantuvo en posesión de su

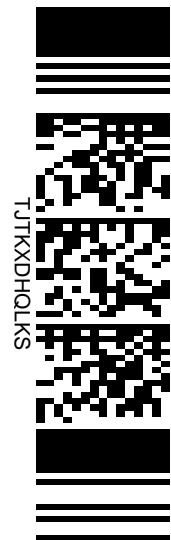


teléfono celular. En efecto, en primer lugar, ningún testigo logró ubicar a Mauricio Quintero el día 15 de marzo de 2020 en la casa de Vanesa Sepúlveda, ni siquiera ella en su propia declaración. Luego, en el horario del asesinato de German Muñoz, en que las cámaras y GPS de su teléfono celular ubican en el sitio del suceso, no logró acreditar haber sido visto por algún testigo. En efecto, con la declaración de Aztiley Canelón Troya descarta cualquier posibilidad de una posible coartada, (...). En cuanto a que Ortega Ramírez se hubiese reunido con Milena Vidal ese día y que habría llegado a su domicilio en un taxi, tampoco fue demostrado, pues la testigo Rosa Casierra Betancourt, ubicó al imputado la noche del 14 y la madrugada del 15 a las 03:00 de la mañana en una plaza cerca del Jumbo y Julia Casierra Betancourt, lo ubicó la noche el día 15 o 16 de marzo del año 2019 a las 3:30 o 4:00 horas. Estos testimonios, fueron vagos, imprecisos y carentes de verosimilitud al no poder contrastarse con ningún otro medio probatorio”.

SÉPTIMO: De la lectura pormenorizada de los literales antes referidos del considerando décimo segundo de la sentencia impugnada, no es posible constatar ningún salto lógico o contradicción en el razonamiento de los sentenciadores, ni se constata la omisión de fundamentación que le atribuyen ambos recurrentes, pero en especial Ortega Ramírez.

Por otra parte, el presunto defecto de haber adoptado la decisión en base a la ausencia de prueba no se configura. Al contrario, la ausencia de prueba que constata el tribunal de instancia se refiere precisamente a la escasa y débil prueba de descargo para acreditar aquellas premisas fácticas que sostenían la teoría alternativa propuesta por la defensa, que en definitiva es desestimada al contrastarla con el mérito de todo el resto de la extensa prueba rendida en el juicio oral, detallada y razonadamente analizada de la manera que se ha explicado en el considerando anterior.

De manera que, en cuanto a cada uno de los aspectos intitulados en el considerando décimo segundo analizados hasta este punto, es posible concluir que se efectuó una apropiada reflexión respecto de los medios de prueba pertinentes para arribar a una conclusión, haciéndose cargo de los elementos comunes que los hacían complementarios y explicando las razones cómo debía resolverse en algunos casos las eventuales contradicciones, sin que ello afectara en modo alguno la convicción unánime

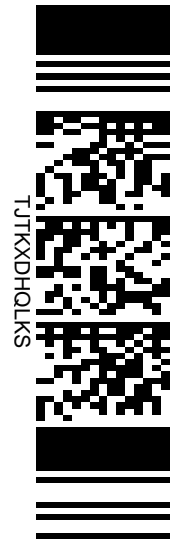


adquirida, más allá de toda duda razonable, haciendo factible arribar a una decisión condenatoria en los términos pretendidos por Fiscalía, al menos en relación con el delito de homicidio calificado que ha sido materia de los dos recursos de invalidación, la dinámica de los hechos y la participación del acusado Ortega Ramírez en calidad de autor material o ejecutor.

OCTAVO: Continuando con el análisis probatorio en el mismo considerando décimo segundo, en el literal f), los sentenciadores de instancia explican las razones y la forma cómo valoraron la prueba rendida para tener por acreditado que el acusado Juan José Ortega Ramírez se dedicaba al sicariato y al cobro de dinero de los prestamistas para los cuales trabajaba. Los sentenciadores vuelven a distinguir entre lo que consideraron como “abundante prueba de cargo” para llegar a la plena convicción de que Ortega actuaba como un agente cobrador de peculios adeudados y que su supuesta profesión de barbero o peluquero era solo una fachada, “toda vez que es contrario a las normas de la experiencia y recta razón, que manejase considerables cantidades de dinero en efectivo, haciendo gala de estas y de sus armas”, con la ausencia de prueba de descargo precisamente sobre la verosimilitud de esta supuesta profesión que el tribunal concluyó no era efectiva. En la sentencia se expuso que el convencimiento de los sentenciadores fue mayor “si se estima que su defensa no aportó ningún elemento probatorio que acreditara la realización de su oficio y lugares donde los desempeñabas”.

En cuanto a la ostentación de armas se tuvo por acreditado con la declaración de Aztiley Canelón Troya, quien dijo haber visto al sentenciado con pistolas, quien primero le dijo que eran de mentira y luego le dijo otra cosa. En cuanto a la relación con prestamistas y que Ortega Ramírez era una suerte de cobrador, el tribunal analiza detalladamente toda la información precisa y clara que se desprende de la declaración de doña Vanessa Sepúlveda Urrea, la que luego relaciona con la declaración del Comisario Rodrigo Gallardo.

Respecto al Sicariato propiamente tal ejercido por Juan José Ortega Ramírez, se tuvo por acreditado con los mensajes y capturas de pantalla del teléfono celular, además de los registros de audio obtenidos mediante interceptación telefónica del número celular del acusado Ortega Ramírez y el análisis que la Policía de Investigaciones de Chile realizó, con asistencia de



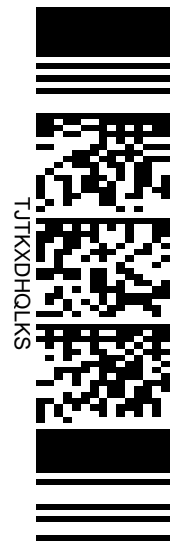
la Policía de Colombia, respecto de la jerga utilizada en las diferentes conversaciones que sostuvo Juan José Ortega Ramírez con varias personas. En la sentencia se detallan esas conversaciones, con fecha e intervinientes, en las que se habrían planificado homicidios y se estimaron como prueba suficiente de que el condenado se dedicaba a cometer sicariato.

NOVENO: Es en los literales g) y h) del ya citado considerando décimo segundo que el tribunal de instancia se detiene a exponer el razonamiento y el proceso de valoración probatorio que le permitió tener por acreditado que Juan José Ortega Ramírez conocía a Francisco González Berríos, que cometió el homicidio por mandato ajeno con un móvil de lucro que inspiró a este ejecutor y el motivo del homicidio de don Germán Muñoz.

Para este efecto y explicar los motivos por los que estimaron que en esta parte la declaración del sentenciado Ortega Ramírez se evidenció como falsa, conectan los medios probatorios de una manera cronológica, con el objeto de permitir dar un contexto y reconstruir la dinámica de los hechos que determinaron que el encargo de la muerte de German Muñoz se produjo en el mes de diciembre de 2019.

Efectivamente el tribunal concluye que existe una relación entre ambos co sentenciados a partir de una reunión de Juan José Ortega Ramírez con Francisco González Berríos, entre otros, en el domicilio ubicado en Pasaje 211 N°3971, comuna de Valdivia, con el objetivo de celebrar el día 08 de diciembre de 2019 el éxito de un equipo deportivo y otros antecedentes que aporta la detallada declaración de la testigo doña Vanessa Sepúlveda Urra, la que luego corrobora con la extracción de una fotografía tomada ese día con el teléfono de Ortega Ramírez. Pero a ello agrega que también se acreditó la realización de un segundo encuentro entre ambos condenados, esta vez el día 25 de diciembre de 2019, momento en el que se habría producido el encargo homicida, conclusión a la que arriba relacionando la declaraciones del Comisario Rodrigo Gallado con el mérito de las capturas de mensajes de texto que fueron exhibidas en la audiencia de juicio oral, la declaración de testigos protegidos, el testimonio de Víctor Ceballos Arango.

La confirmación de que existió un pago efectuado por Francisco González y que proviene directamente del asesinato de German Muñoz, en la sentencia de instancia se expresa que se obtuvo mediante la información



extraída del teléfono del imputado Ortega Ramírez, en particular de las conversaciones sostenidas por el sentenciado a través del aplicativo Messenger de Facebook con José Rodríguez Ayala, otras conversaciones de WhatsApp, registros de audio y tráficos de llamadas o mensajes de voz entre los co sentenciados. Para los sentenciadores este cúmulo de antecedentes son suficientes para estimarlos como “indicio, claro, preciso y concordante con toda la prueba de contexto de la existencia de un pago para contextualizar un encargo de muerte”.

DÉCIMO: En efecto, resulta especialmente relevante al momento de analizar la causal de nulidad invocada por ambas defensas lo que concluyen los sentenciadores en el párrafo final del tantas veces referido considerando décimo segundo de la sentencia impugnada. El tribunal declara y reconoce que, no obstante todo el cúmulo de la prueba de cargo presentada en la audiencia de juicio, “es menester considerar, a la hora de evaluar lo expuesto por los acusadores, en cuanto a que la intervención punible de los acusados por estos rubros proviene de la prueba indiciaria presentada”.

Pero a continuación expresan que “estos sentenciadores avistan en los elementos incorporados por el acusador situaciones probadas de las que pueda inferirse, fluir naturalmente una concatenación, alcanzando el grado de indicios bastantes para conformar la certeza requerida para una decisión de condena”. Dicho de otra manera, toda la detallada explicación sobre el razonamiento probatorio que hicieron los sentenciadores respecto de cada uno de los aspectos brevemente referidos en los considerandos sexto, octavo y noveno de esta sentencia de nulidad, tuvo el propósito de exteriorizar la manera cómo partiendo desde los indicios se llegó como conclusión unívoca al dato vinculante, nexo causal lógico, que generó la certeza del órgano jurisdiccional. Así es como, en el caso de marras, los sentenciadores avistaron en los elementos incorporados por el acusador situaciones probadas de las que puede inferirse, fluir naturalmente una concatenación, alcanzando el grado de indicios bastantes o suficientes para conformar la certeza requerida para una decisión de condena.

DÉCIMO PRIMERO: Por lo tanto, los reproches de nulidad absoluta que ambas defensas le formulan a la sentencia no pueden estimarse que concurren en la especie, por cuanto el razonamiento probatorio del tribunal no carece de fundamentación y en la construcción de sus conclusiones



fácticas no se observa que los sentenciadores hayan incurrido en la infracción que se les ha imputado, lo que obliga a esta Corte a desestimar ambos arbitrios por la causal invocada, como se dirá en lo resolutivo.

Así las cosas, debiendo tener claro que lo que constituye un vicio lógico es la contradicción entre las argumentaciones que se labran en el fallo del tribunal, mas no el que naturalmente puede darse entre algunas deposiciones testimoniales o el mérito probatorio de unas pruebas respecto de otras, en el asunto que nos ocupa tal déficit está ausente tanto en la descripción de los hechos como en la ponderación de las pruebas, sin que aparezca o se detecte la falta de argumentación que han intentado resaltar los recurrentes, observándose que los sentenciadores explicaron satisfactoriamente las razones por las que alcanzaron convencimiento respecto de los hechos investigados y la autoría de ambos acusados en ellos, haciéndose expreso cargo de las alegaciones de cada una de las defensas y explicando por qué fueron desestimadas.

Por tal motivo, esta Corte estima finalmente que lo inferido en la instancia a partir de la prueba indiciaria puede ser entendido de modo adecuado por cualquier hombre medio que dé lectura al fallo, esto es, por un sujeto con la mínima capacidad de raciocinio exigible para dicha comprensión; por lo que no habrá de prosperar esta primera vertiente causal de la nulidad del fallo ni del juicio.

DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto a la causal de nulidad invocada en subsidio de la anterior, la defensa del sentenciado Ortega Ramírez ha invocado aquella contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal esto es, que en el pronunciamiento de la sentencia se hizo una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en este caso como infracción al artículo 11 N°6 del Código Penal, especialmente en lo tocante a la pena aplicada por el delito de homicidio calificado. Como consecuencia de lo anterior, afirma la defensa recurrente, a su representado se le aplicó una pena superior a la que correspondía legalmente por tanto se configura lo dispuesto en el artículo 385 del Código Penal (sic).

La infracción denunciada se habría configurado en la medida que a su representado no le fue reconocida la atenuante establecida en el ya citado artículo 11 N°6 del Código Penal, por estimar el tribunal que “siendo de cargo

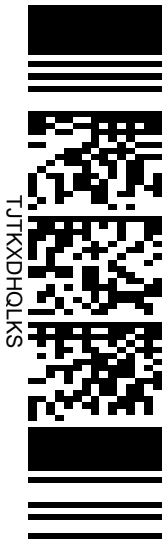


de la Defensa incorporar el extracto de filiación y antecedentes del acusado exento de reproche anterior, no lo hizo, como tampoco fue allegado por la defensa ningún dato o antecedente que demostrara que el encartado es poseedor de una irreproachable conducta anterior, circunstancia que no se puede presumir de la sola falta de acreditación de anotaciones penales anteriores y por solo los dichos del abogado defensor, más aún si en el auto acusatorio el ente persecutor no reconoce dicha atenuante, teniendo en cuenta además, que se trata de un sujeto que, según los antecedentes aportados, llevaba varios años viviendo de forma irregular en Chile, lo que hace aún menos relevante o sustancial la información relativa únicamente a la conducta penal en su país de origen, estimando que la defensa debía aportar otros antecedentes que demostraran, además, la falta de reproche en la conducta de Ortega Ramírez. (Rol 14.451-2022 Corte de Suprema de 9 de agosto de 2022)".

Estima la parte recurrente de nulidad que las razones esgrimidas por el tribunal para descartar esta circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, resultan contrarias a derecho y por lo tanto, representan efectivamente el yerro denunciado.

DÉCIMO TERCERO: Atendida la causal invocada y de modo preliminar, es conveniente resaltar que esta transgresión en particular puede ocurrir de las siguientes formas: contraviniendo las normas legales formalmente al dejar de aplicar las reglas pertinentes, interpretándolas erróneamente al atribuirles un sentido o alcance que no les corresponde o haciendo una falsa o improcedente aplicación de las mismas al caso en cuestión. Por su parte, debe tenerse presente que la causal esgrimida recae exclusivamente sobre aspectos de Derecho, no pudiéndose alterar por intermedio de ella los elementos fácticos que el tribunal de instancia hubiere determinado respecto a la materia sometida a su decisión, cuyo conocimiento se encuentra por tanto vedado a esta Corte.

DÉCIMO CUARTO: Si bien el arbitrio, respecto a esta causal subsidiaria, fue interpuesto denunciando una presunta infracción, contravención formal o falta de aplicación de la norma contenida en el artículo 11 N°6 del Código Penal, el desarrollo argumental de esta parte del recurso resulta confuso respecto a lo que en realidad se imputa al tribunal de instancia. Por una parte pareciera que se denuncia que los sentenciadores

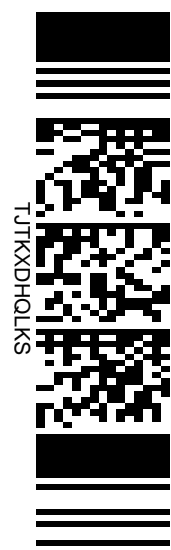


del grado incurrieron en una errónea interpretación de la disposición, pero en otra parte se acusa al tribunal de haber “aplicado erróneamente la norma legal”, ambos errores jurídicos distintos entre sí y respecto al de infracción, contravención o falta de aplicación que inicialmente se anunció que fundamentaba la interposición del recurso.

DÉCIMO QUINTO: Haciendo caso omiso del defecto de fundamentación apuntado en el basamento que precede, el motivo de invalidación en análisis, relativo al error de derecho con gravitación sustancial en lo decisorio, en lo sustantivo se construye en que la circunstancia atenuante que la defensa recurrente pretende que esta Corte le reconozca a su representado está legalmente establecida en los siguientes términos: “Si la conducta anterior del delincuente ha sido irreprochable”. Para estos efectos resulta relevante que en el propio arbitrio se reconozca que la disposición contempla un elemento de valoración, que está entregado a la calificación jurídica del tribunal a partir de los hechos que se acrediten en el proceso, cual es la expresión “irreprochable” respecto a la conducta pretérita de la persona del condenado.

DÉCIMO SEXTO: En este mismo sentido, se debe desestimar la alegación de la parte recurrente respecto a que el tribunal de instancia hubiere incurrido en el error de derecho que se le atribuye, precisamente en base a lo expresado en el considerando anterior y complementado con la cita a la obra del profesor y ex ministro don Mario Garrido Montt que consta en el mismo arbitrio. Los sentenciadores deben realizar un proceso de valoración o calificación de las circunstancias de hecho que las partes hubieren acreditado en el proceso, con el objeto de decidir en cada caso si la conducta anterior de la persona condenada por la comisión de un delito amerita ser calificada de “irreprochable”, ya sea en su dimensión negativa, es decir carente de mácula, como positiva en el sentido de un comportamiento ético-social adecuado con sus semejantes.

La norma legal no señala ninguna forma especial en que se pueda acreditar la concurrencia de esta minorante de responsabilidad penal. Sin duda no la limita a solo una manera de acreditar que esta atenuante concurre a favor del respectivo imputado, mediante el extracto de filiación u otro documento análogo, pero tampoco impide que se pueda probar con otros medios, ya fueren suplementarios o complementarios al referido extracto si



este faltare, como ocurre en el caso de marras respecto de un residente de nacionalidad extranjera con situación migratoria irregular.

DÉCIMO SÉPTIMO: Atendido lo anterior, no es efectivo que en el proceso de valoración hecha por los sentenciadores de la instancia respecto del mérito del proceso, que los llevó a no reconocerle al imputado Ortega Ramírez la concurrencia de la atenuante de responsabilidad alegada por la defensa, se hayan impuesto exigencias adicionales a las establecidas en la norma legal, como lo afirma la parte recurrente. El tribunal del grado se limitó a analizar la prueba rendida en el proceso y rechazó la solicitud de la defensa ante la constatación de la ausencia absoluta de antecedentes que permitiesen tener por acreditadas las alegaciones de hecho formuladas para sostener a favor de Ortega Ramírez su supuesta conducta anterior irreprochable, tanto en Chile como en Colombia.

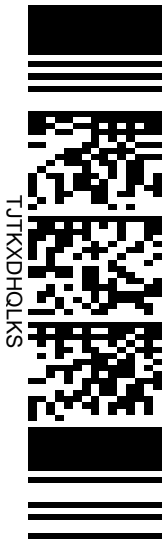
Para llegar a esta conclusión hizo un fundado ejercicio de valoración o calificación dentro del ámbito que le reconoce el propio artículo 11 N°6 del Código Penal. Pero no se observa que en la sentencia se haya incurrido en ninguna de las modalidades de error jurídico que podrían hacer procedente la causal de nulidad contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal invocada por la defensa del condenado Ortega Ramírez, por lo que este defecto denunciado de manera subsidiaria también será desestimado.

Por lo expuesto y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 372 y siguientes del Código Procesal Penal, se **RECHAZAN, sin costas**, los recursos de nulidad deducido por las defensas de los sentenciados Francisco González Berríos y Juan José Ortega Ramírez contra la sentencia definitiva de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia en la causa RUC. N°20002981169-7, RIT. 141-2022, declarándose que NO es nula como tampoco el juicio del cual proviene.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Luis Alejandro Durán Roubillard.

N°Penal-1514-2022.





TJTKXDHQKLS

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia integrada porMinistra Sra. Marcia Undurraga Jensen, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo por encontrarse con permiso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales, Ministra Sra. María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Abogado Integrante Sr. Luis Durán Roubillard Valdivia, diez de febrero de dos mil veintitrés.

En Valdivia, a diez de febrero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

